

DOCUMENTO DE PROCESO – MARZO 2026

MOVIMENTO DA MULHER TRABALHADORA RURAL DE SERGIPE (MMTR-SE) Y COLETIVO DE MULHERES DA COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO NACIONAL DAS COMUNIDADES NEGRAS RURAIS QUILOMBOLAS (CONAQ)

Introducción

El capítulo brasileño del proyecto Otras Formas tiene como objetivo principal analizar los logros y las amenazas enfrentadas por las mujeres en el país, a partir de la lucha por derechos que inserta los derechos de las mujeres dentro de un marco más amplio de derechos: derecho a la tierra, al territorio, a la salud, a la educación, al cuidado, a la autodeterminación, a la inclusión productiva y a la comunicación. Esta elección temática se da, en primer lugar, por el protagonismo de mujeres quilombolas, rurales, indígenas, pescadoras, mariscadoras, entre otras, en la lucha por la tierra, por el territorio y por la justicia socioambiental en el país. Y, en segundo lugar, por el deseo de mirar los feminismos desde su transversalidad dentro de las luchas antirracistas, anti-LGBTfóbicas, anticapitalistas y anticoloniales, en dirección a una transformación radical de la sociedad que nos conduzca al buen vivir, tal como fue formulado por pensadoras indígenas o, en palabras de Verónica Gago (2020), ante el “deseo de cambiarlo todo”.

Para ello, establecimos una alianza de trabajo, basada en metodologías colaborativas, entre Intervozes – Colectivo Brasil de Comunicación Social, el Grupo de Investigación en Género, Religión y Política del Laboratorio de Antropología de la Religión de la Universidad de Campinas (Grepo/Lar/Unicamp), el colectivo de mujeres de la Coordinación Nacional de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas (Conaq) y el Movimiento de Mujeres Trabajadoras Rurales de Sergipe (MMTR-SE).

Junto con la alianza, estamos elaborando dos estudios de caso: uno sobre el colectivo de mujeres de la Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas – CONAQ, presente en todo el país, y otro sobre el Movimiento de Mujeres Trabajadoras Rurales del Estado de Sergipe – SE, con actuación en la región Nordeste de Brasil. Nos interesa observar las reacciones, luchas y estrategias del movimiento de trabajadoras rurales de Sergipe frente al contexto de amenazas a este sector como sujeto de derechos, derivadas de la intensificación de la polarización política entre la extrema derecha y los sectores progresistas, así como la autoorganización de las mujeres quilombolas y los desafíos en el enfrentamiento del racismo e al modelo de desarrollo adoptado por el país. Este estudio se centrará en los cambios en el panorama político y en las luchas por los derechos que han tenido lugar en los últimos 23 años, un período en el que el país ha vivido momentos significativos y paradójicos de ampliación de la participación popular para hacer frente a las desigualdades de género, raciales y sociales, al mismo tiempo que las violaciones de los derechos de las mujeres y las personas no blancas han aumentado y se han multiplicado de manera exponencial. Ambos estudios de caso, respondiendo a las demandas del proyecto y de los dos movimientos, convergen en el objetivo de identificar las acciones anti-género y anti-derechos, cómo afectan a las mujeres rurales y quilombolas y qué estrategias están o podrán ser adoptadas para enfrentarlas desde una doble perspectiva: los desafíos externos, referidos a las estructuras políticas, económicas y sociales contra las cuales se levantan las luchas feministas y de las mujeres por la tierra, el territorio y el buen vivir; y los desafíos internos, relacionados con las formas de organización, renovación y innovación de estos movimientos, así como su relación con el movimiento feminista y con las mujeres en general.

1. Contexto político de las luchas por la tierra, el territorio y la igualdad de género: las mujeres rurales y quilombolas

Aunque las luchas por la tierra, el territorio y la igualdad racial y de género forman parte de los orígenes de los movimientos sociales populares brasileños, impulsadas por

la autoorganización de estos sectores, es a partir de la década de 2000 cuando surge una agenda política más interseccional de estas luchas como respuesta al neoliberalismo. Este fenómeno es fruto de la alianza de los sectores de la sociedad civil para la construcción de una Constitución Ciudadana en 19881 y de las coaliciones creadas a lo largo de los años noventa para denunciar la colonialidad del poder, entre las que destaca la Marcha Zumbi dos Palmares², en 1995, la Marcha da Ousadia³, en 1999, así como las movilizaciones de las mujeres para la construcción de plataformas internacionales de lucha en torno a la Conferencia de las Naciones Unidas —la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995, y la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban en 2001— y las Marchas de las Margaritas y la Marcha de las Mujeres Negras, más recientemente.

A partir de 2003, con la llegada de sectores progresistas al Gobierno Federal y a los ámbitos subnacionales, aumentó la presión a favor de políticas sociales, procedente especialmente de los sectores populares, como las mujeres rurales, las comunidades quilombolas, los movimientos de mujeres negras y los movimientos feministas. A medida que estos movimientos intensificaban sus denuncias, la reacción en su contra se intensificó, proveniente especialmente de los sectores gubernamentales, judiciales, empresariales y mediáticos que, por un lado, defendían el retroceso de políticas ya conquistadas y, por otro, ampliaban proyectos desarrollistas, justificando la construcción de megaproyectos de infraestructura que violan los derechos de los territorios con la posibilidad de una mayor distribución de ingresos a través de empleos temporales y precarios.

Comunidades quilombolas: el conflicto por la tierra y el territorio y su impacto en las mujeres

La principal prioridad política de las comunidades quilombolas fue la reglamentación del artículo 68 de la Constitución Federal, que reconoció, en 1988, a los quilombos como sujetos de derechos. A principios de la década de 2000, fue necesario derogar el decreto presidencial 3912/2011, del entonces presidente Fernando Henrique Cardoso, que imponía barreras al reconocimiento de los derechos territoriales de los

quilombolas, dando una clara señal de que no habría expropiación de tierras en posesión de los terratenientes para el uso colectivo de las comunidades negras.

En 2003, el Gobierno Federal, liderado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, derogó ese decreto y promulgó el decreto n.º 4887/2003, que estableció las condiciones jurídicas para la titulación de los territorios, aplicando el concepto adecuado a las comunidades quilombolas, con especial énfasis en el uso colectivo de la tierra, la autoidentificación como requisito indispensable para su reconocimiento, así como atribuciones al INCRA —Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria— para llevar a cabo la titulación y sus etapas de demarcación y expulsión de terceros. Sin embargo, ese mismo gobierno tomó, en los años siguientes, decisiones que hasta hoy frenan las titulaciones de los territorios quilombolas, como los procesos burocratizados de registro general de las comunidades (Orden de la Fundación Cultural Palmares n.º 98 de 2007) y el obstáculo en el establecimiento de instrucciones normativas de titulación por parte del INCRA, poniendo en riesgo incluso el principio de autoidentificación ([instrução Normativa Incra nº 49/2008; Instrução Normativa nº 56 de 7 de outubro de 2009; Instrução Normativa nº 57 de 20 de outubro de 2009](#)).

Además de las barreras burocráticas impuestas por el Gobierno Federal para la titulación, en 2004 las comunidades quilombolas se enfrentaron a una ofensiva en el ámbito jurídico destinada a impedir el ejercicio de sus derechos. Ese año, el Partido de la Frente Liberal (PFL) presentó una Acción Directa de Inconstitucionalidad n.º 3239 ante

1 Constituição brasileira aprovada no período de redemocratização do país, após mais de 20 anos de ditadura militar.

2 Marcha que reuniu mais de 30 mil pessoas em Brasília, capital do Brasil, para reivindicar políticas de enfrentamento às desigualdades raciais. Fruto dessa mobilização houve a criação de um dos primeiros grupos interministeriais de valorização da população negra.

3 A marcha reuniu mais de mil pessoas que caminharam da cidade do Rio de Janeiro até a cidade de Brasília para denunciar os impactos do neoliberalismo na vida da população, em especial das pessoas do campo. A marcha foi realizada por organizações populares, em especial o MST, que reivindicaram o fim da concentração de terra e a construção de um projeto político popular para o país.

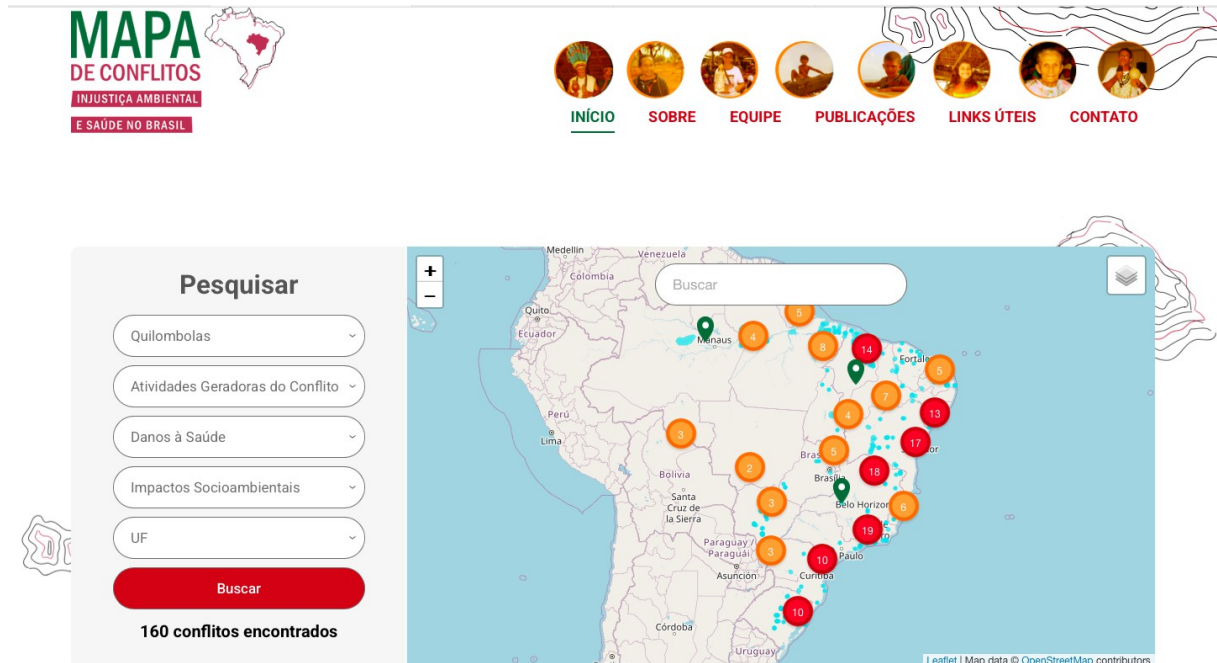
la Corte Suprema de Justicia de la Federación contra el decreto presidencial n.º 4887/2003, que regulaba a las comunidades quilombolas como sujetos de derechos. Esta acción dejó prácticamente en suspenso las titulaciones de tierras entre 2004 y 2018, año en que el caso fue juzgado definitivamente, confirmando la constitucionalidad de la garantía de la posesión colectiva de tierras a las comunidades quilombolas mediante el decreto 4887/2003.

Durante 15 años, el Gobierno federal mantuvo paralizados los procesos de reconocimiento y titulación de tierras. A pesar de su discurso progresista sobre la redistribución de la renta, este Gobierno no renunció a la concentración de la propiedad de la tierra ni a su relación con el agronegocio, en detrimento de las trabajadoras de la agricultura familiar y de las comunidades quilombolas.

Entre los años 2016 y 2022, con la llegada de la extrema derecha al Gobierno Federal, la situación de los quilombos se volvió aún más difícil. El entonces presidente, Jair Bolsonaro, en sus primeros días de mandato, anunció que en su gobierno no habría «ni un centímetro demarcado para reservas indígenas o para quilombolas». Y las políticas de recorte presupuestario para la titulación de tierras, la persecución de funcionarios y los cambios estructurales en los organismos responsables de las políticas quilombolas hicieron realidad esta afirmación. El resultado de esos años fue una intensificación de los conflictos en los Territorios Quilombolas, que afectan principalmente a la vida de las mujeres quilombolas.

Según el [“Mapa de Conflictos, Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil”](#), creado en 2008 por la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), existen al menos 160 conflictos en todo el territorio brasileño relacionados con las tierras quilombolas.

Imagem dos quilombos ameaçados no mapa do Brasil.



En 2023, la Comisión Pastoral de la Tierra también registró un año récord en cuanto a conflictos agrarios, cuyas principales víctimas fueron las comunidades tradicionales, entre ellas los Territorios Quilombolas. Según la investigación "[Conflitos no Campo Brasil 2024](#)" se registraron 2.185 conflictos, de los cuales 1.768 se debieron a actos de violencia contra la ocupación y la tenencia de tierras y 266 a disputas por el acceso al agua.

En cuanto a los conflictos por el agua y su relación con la contaminación de las personas, la población quilombola fue el segundo grupo con mayor número de víctimas. Los agroquímicos, por ejemplo, se utilizan como armas químicas contra estas poblaciones, que reportaron 276 incidentes, afectando a 17 027 familias: «Las familias quilombolas del Quilombo de Providência, en Salvaterra, denuncian el vertido irregular de agroquímicos de una plantación de arroz que se superpone al área tradicional. Líderes comunitarios son envenenados, lo que resulta en hospitalización — Salvaterra-PA, Comunidad Quilombola Providência — 4/03/2024» (2024, CPT).

En 2024, el estudio [“As Pressões Ambientais nos Territórios Quilombolas no Brasil”](#) Un estudio del Instituto Socioambiental (ISA), en colaboración con la CONAQ, reveló que el 98 % de los territorios quilombolas brasileños se encontraban amenazados, es decir, sometidos a la presión de proyectos mineros, obras e infraestructura, así como a la superposición de propiedades privadas.

Los impactos de este contexto son la destrucción del modo de vida quilombola y la inseguridad jurídica, que impide el acceso a la justicia y aumenta la dificultad para acceder a servicios de salud, como exámenes preventivos, educación escolar quilombola y servicios sociales, entre otros.

Algunos ejemplos de conflictos repartidos por las cinco macrorregiones del país ponen de manifiesto las múltiples formas de violencia a las que están sometidas las mujeres quilombolas y sus territorios.

En el norte del país, en la región de Barcarena (PA), los quilombos de São João, Sítio da Conceição, Burajuba, Gibrié de São Lourenço y Cupuaçu conviven desde hace 36 años con los impactos de la mayor productora de alúmina del mundo, explotada por la empresa noruega Hydro Alunorte, responsable de delitos ambientales que causan intoxicaciones a niveles mortales, hasta el punto de que la región sea conocida como la [Chernobyl da Amazônia](#).

Estas comunidades conviven con sucesivas roturas de presas de residuos tóxicos, entre las que destaca la catástrofe de 2018, que inundó varias comunidades y barrios de la ciudad de Barcarena (PA). El lodo rojo, que contiene aluminio, plomo, cromo, níquel, manganeso y bario, se extendió por ríos y arroyos, dejando a miles de personas contaminadas y sin asistencia hasta el día de hoy.

[Socorro de Burajuba](#), La líder quilombola, presidenta de la Asociación de Caboclos, Indígenas y Quilombolas de la Amazonía (CAINQUIAMA), perdió a su esposo, quien padecía enfermedades relacionadas con la contaminación por metales pesados. Además, a ella misma se le ha detectado, mediante análisis, un elevado nivel de metales pesados en el cuerpo. Socorro es una de las principales voces de la resistencia que sigue denunciando los delitos de la empresa minera. Debido a su lucha, ha recibido amenazas de muerte en numerosas ocasiones, su casa ha sido allanada y hoy vive con el temor de

morir, ya sea por la contaminación o a manos de las milicias armadas de las empresas que explotan minerales en su región.

Desde 2016, las comunidades quilombolas cercanas a la ciudad de Barcarena esperan la regularización de la propiedad de su territorio, después de que [a quienes el Estado les cedió ilegalmente sus tierras al municipio](#), que de inmediato comenzó a distribuir las tierras entre empresarios de la ciudad. La respuesta de los organismos encargados de la titulación de las tierras es que la inseguridad jurídica provocada por la donación ilegal de tierras impide la titulación. Sin embargo, es precisamente la falta de titulación de los quilombos lo que causa inseguridad física y jurídica a los quilombolas, especialmente a mujeres como Socorro de Barajuba, que viven bajo amenazas constantes.

En la región del Nordeste, destacamos el caso de Bernadete Pacífico, líder de la CONAQ asesinada en 2023 y ya mencionada en la primera versión de este estudio de caso. Volvemos a hablar de ella debido a los recientes acontecimientos relacionados con el caso.

Entre marzo y abril de este año, el juicio de los acusados por el asesinato de Mãe Bernadete se pospuso dos veces y los movimientos sociales, entre ellos Amnistía Internacional Brasil, creen que las demoras en el manejo del caso se deben a la participación de fuerzas políticas con el objetivo de ocultar a los mandantes del crimen.

La familia de Mãe Bernadete lidera la lucha por la titulación del Quilombo Pitanga dos Palmares, territorio que sufre acoso por la especulación inmobiliaria, la apropiación ilegal de tierras y los proyectos de desarrollo, entre ellos la instalación de un vertedero de residuos de la construcción desde 2015. Resulta que el lugar, además de ser un territorio tradicional de quilombo reconocido por los organismos competentes, también es un área de preservación ambiental, la APA Joanes Ipitanga, compuesta por el acuífero de São Sebastião, que abastece a la ciudad de Salvador y a la región metropolitana.

Cinco años antes del asesinato de Mãe Bernadete, su hijo mayor, Flávio Gabriel Pacífico, también conocido como Binho do Quilombo, fue asesinado en el territorio quilombola que defendía. Él lideraba el movimiento «Nuestras Aguas, Nuestra Tierra, Nuestra Gente», organizado en 2016 para impedir la instalación del vertedero en un área

de 162 hectáreas, donada por la alcaldía de la ciudad de Simões Filho a la empresa Naturalle.

El movimiento presentó una denuncia ante la Fiscalía Federal y Estatal contra la empresa y, hasta la fecha, el caso sigue en los tribunales. Cabe destacar que el dueño de Naturalle es miembro de la familia Souto, del exgobernador de Bahía, Paulo Souto, quien formó parte durante 40 años del grupo político que dirigió el estado, hoy afiliado al partido Demócratas (DEM). El grupo es bien conocido en toda Bahía por utilizar métodos violentos para eliminar a sus opositores.

Hay fuertes indicios de que [el asesinato de Binho do Quilombo y de Mãe Bernadete estén relacionados con los conflictos por la tierra que afectan al Quilombo Pitanga dos Palmares](#), Sin embargo, en febrero de 2026, la investigación sobre el hijo de Mãe Bernadete fue archivada por falta de pruebas. Unas semanas después, se reprogramó el juicio de los acusados por el asesinato de Mãe Bernadete, que está previsto para el 13 de abril; sin embargo, hasta ahora, en las líneas de investigación del caso no se ha hecho mención alguna a los mandantes del crimen. El único hijo que queda de esta familia quilombola, Jurandir Pacífico, sigue recibiendo amenazas de muerte por mantener viva la lucha de su familia. Hoy forma parte del Programa de Protección de Defensores del Gobierno Estatal, la misma medida de protección de la que se beneficiaba su madre cuando fue asesinada.

Según un estudio realizado por el ISA en colaboración con la CONAQ, más de la mitad de las tierras de los territorios quilombolas de la región Centro-Oeste se ven amenazadas por obras de infraestructura (57 %). En esta región, los territorios son también los más afectados por proyectos mineros (35 %) y por la explotación sexual infantil.

El Territorio Kalunga, en Goiás, es el más afectado, con 180 solicitudes de superposición que abarcan el 66 % de su territorio. El área del quilombo se divide entre los municipios de Teresina, Cavalcante y Monte Alegre, en Goiás, y abarca 39 comunidades, con 1.800 familias y cerca de 8.400 personas que luchan por mantener en pie el bioma de la caatinga, que aún conserva el 80 % de su vegetación protegida,

frente a los [50 puntos por incursiones y 2 puntos por extracción de minerales](#) identificados por la Ministério Público .

En un [reportaje](#), La abogada, quilombola y miembro del Colectivo de Mujeres de la CONAQ, Vercilene Dias, explica que ya ha habido casos de personas que han comprado tierras por Internet. De las más de 261 mil hectáreas reconocidas oficialmente como territorio kalunga desde 1996, menos del 10 % ha sido titulado hasta la fecha, lo que deja al territorio vulnerable a la apropiación ilegal de tierras, la deforestación y las violaciones de derechos, en especial los derechos de las mujeres.

Entre 2011 y 2020, un [estudio sobre la violencia en el campo](#) realizado por la CPT identificó 30 violaciones cometidas contra niños y adolescentes del Territorio Quilombola Kalunga. Estos actos de violencia solo cobraron visibilidad en 2015, cuando un periódico de la región denunció al concejal de la ciudad de Cavalcante-GO, Jorge Elias Cheim (PSD), por abusar de una niña quilombola de 12 años. La denuncia adquirió repercusión nacional y llamó la atención de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) encargada de investigar las causas, razones, consecuencias y costos sociales y económicos de la violencia, la muerte y la desaparición de jóvenes negros y pobres en Brasil. La CPI citó al exconcejal para que prestara declaración con el fin de investigar una red de explotación sexual infantil de niñas quilombolas kalungas. Un año después de la divulgación de las denuncias, el silencio volvió a cernirse sobre el caso, tal como denunció el reportaje [“El silencio tras la sierra”](#) , en 2019, el exconcejal fue absuelto de los delitos que se le imputaban..

La región sudeste del país tiene alrededor de [182,4 mil quilombolas](#), y cuenta con la segunda población quilombola más grande del país (IBGE, 2022). Según el estudio de ISA/CONAQ, el 64 % de los territorios del Sudeste se superponen con propiedades rurales privadas. Además, en 2015, la región sufrió el mayor delito socioambiental del país: la rotura de la presa de Fundão, operada por las mineras Vale do Rio Doce y BHP Billiton, en la ciudad de Mariana (MG). Este delito derramó toneladas de residuos mineros del río Doce y afectó de lleno a los quilombos de los estados de Minas Gerais y Espírito Santo. Al menos [34 comunidades se vieron afectadas](#), entre las que destaca el Territorio Quilombola de Sapê do Norte.

Estas comunidades se enfrentan al reto de lidiar con dos grandes impactos ambientales que generan conflictos en los territorios desde hace décadas: la explotación del eucalipto y las consecuencias de la rotura de la presa de Fundão.

La expansión del monocultivo de eucalipto, los llamados «desiertos verdes», comenzó en 1990 y avanza sobre los territorios, provocando escasez de agua, empobrecimiento del suelo, inseguridad alimentaria y mucha violencia. La empresa responsable de la explotación del eucalipto en la región, Suzano, crea un clima de vigilancia y violencia constante contra los quilombolas. El liderazgo quilombola [Flávia dos Santos](#), de la comunidad de Angelim II, en Conceição da Barra, denunció en febrero de 2026 nuevos ataques que van desde agresiones físicas hasta la destrucción de los cultivos de las comunidades. En el mismo territorio, la comunidad de São Domingos llegó a tener [39 personas detenidas, entre ellas mujeres y personas de tercera edad](#), acusadas por la empresa de robo de madera, en 2009.

Desde 2015, el Territorio Quilombola se ha visto afectado por los residuos mineros de la presa de Fundão, que contaminaron las aguas, el suelo de la región y a las personas con cadmio, cromo y metales pesados procedentes del lodo tóxico que avanzó por el río Doce hasta llegar a su desembocadura, en el estado de Espírito Santo. Hasta la fecha, este delito sigue sin recibir la reparación debida, ya que a los quilombolas se les niega incluso el acceso a exámenes para comprobar la contaminación. La población de esta región denuncia el alto índice de enfermedades renales desde la contaminación del agua por este delito socioambiental y busca [reparación judicial](#).

En el sur del país, la región con los índices más altos de superposición de registros rurales privados en los territorios quilombolas (73 %), los 170 quilombos afectados por las inundaciones de 2024 siguen buscando hasta hoy una reparación y enfrentan dificultades para acceder a la justicia.

En 2025, un año después de las inundaciones, el Quilombo Morada da Paz, el Territorio Quilombola São Miguel dos Pretos, la Comunidad Quilombola São Roque, el Quilombo Júlio Borges, el Quilombo Unidos da Vila do Sabuqueiro y el Unidos do Lajeado exigieron al Consejo de Derechos Humanos respuestas a las demandas de reparación

y consulta libre, previa e informada para la instalación de proyectos en sus territorios, pero no se avanzó nada.

En este sentido, los territorios quilombolas siguen bajo presión por parte de proyectos que violan los derechos fundamentales, mientras que los avances en la demarcación y titulación son lentos. Existe una tensa simultaneidad entre las señales institucionales procedentes de la apertura de diálogos en grupos de trabajo intergubernamentales y los anuncios de titulación para 2025/2026, y la persistencia de la violencia en los territorios.

Se constata la persistencia de conflictos de tierras, la lentitud en la titulación y las presiones de empresas y agricultores; impactos socioambientales crecientes (centrales hidroeléctricas, transición energética, racismo ambiental); la salud y la vida siguen siendo vulnerables: muertes evitables, feminicidios y sufrimiento mental aún marcan los territorios.

Mujeres rurales de Sergipe: lucha contra la violencia y promoción de la agricultura familiar

En la vida de las mujeres agricultoras del MMTRSE, también está muy presente el contexto de violaciones de derechos frente a la incierta aplicación de las políticas institucionales. Las líderes del MMTRSE informan de que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar ha presentado nuevas políticas sin proporcionar los recursos suficientes para su implementación, en comparación con los recursos invertidos en el agronegocio.

En 2025, mientras que el agronegocio recibió inversiones por 516 mil millones, a la agricultura familiar se le destinaron 89 mil millones de reales. Esta realidad también ejemplifica la captura del presupuesto público por parte de los parlamentarios del Congreso Nacional, que mantienen una bancada de políticos vinculados al agronegocio, con 353 diputados y senadores [en su mayoría de derecha y extrema derecha](#).

Con el sistema electoral actual y el peso de las enmiendas parlamentarias, no se crea un entorno favorable para el avance de las candidaturas de mujeres del sector

popular, especialmente las mujeres negras, rurales, de las periferias y de origen popular, que son precisamente las que más necesitan ocupar los espacios de poder y ampliar las políticas para la agricultura familiar.

El panorama político se articula directamente con el aumento de la violencia de género. El incremento de los casos de feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres no puede disociarse de un entorno en el que los discursos de odio ganan espacio y legitimidad en el Congreso Nacional con figuras como el diputado Nikolas Ferreira.

La creación de pactos para combatir el feminicidio y el avance de propuestas para criminalizar la misoginia en el Senado indican un movimiento importante, tanto por parte del gobierno como del parlamento y de los parlamentarios comprometidos con esta agenda. Sin embargo, es fundamental comprender que la lucha contra la violencia no puede limitarse a sus consecuencias. Es necesario actuar sobre sus causas estructurales.

En Sergipe, la realidad no es diferente al resto del país; se observa un preocupante aumento de la violencia contra las mujeres. En los últimos meses, han salido a la luz varios casos graves, lo que pone de manifiesto la gravedad de la situación y la urgencia de respuestas efectivas.

Es importante destacar que esta realidad es aún más profunda de lo que revelan los datos. Muchas mujeres permanecen en silencio, ya sea por miedo, dependencia económica y emocional, o por las dificultades de acceso a redes de protección, especialmente aquellas que viven en contextos de mayor vulnerabilidad y en zonas más alejadas de los centros urbanos.

Ante este panorama, el movimiento de mujeres trabajadoras rurales de Sergipe se mantiene en estado de alerta permanente, reafirmando que la lucha contra la violencia contra la mujer exige una actuación continua, articulada y comprometida. No se trata de acciones puntuales, sino de un proceso permanente de lucha, que implica prevención, acogida, denuncia e incidencia política.

Fortalecer esta lucha significa ampliar el acceso a la información, garantizar políticas públicas efectivas y construir estrategias que lleguen a las mujeres en los territorios, especialmente a las trabajadoras rurales. También significa afirmar que la violencia contra las mujeres no puede naturalizarse y que su combate es una responsabilidad colectiva.

A pesar de los numerosos desafíos, también es importante reconocer algunos logros que se han ido concretando gracias a la participación política y la incidencia de las mujeres rurales. La reciente llegada de servicios de infraestructura a los asentamientos de reforma agraria, con el acompañamiento del MMTRSE, como la construcción de espacios públicos, el pavimento y la plaza, es un ejemplo de ello.

Aunque se trate de demandas antiguas, estos logros representan avances importantes y son fruto de la organización colectiva, incluso para la llegada de la red de Internet incluso antes que la red telefónica, que aún es muy precaria.

Las mujeres que viven en el asentamiento y forman parte del MMTR/SE están creando un colectivo de mujeres productoras interesadas en producir y procesar su producción, así como en acceder a los mercados para venderla.

Al mismo tiempo, se está dando un debate interno entre los asentados sobre la importancia del acceso a las políticas públicas, especialmente a las políticas de crédito.

Tras un período de grandes dificultades, hoy existen oportunidades, como las líneas de crédito del PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar), que incluyen iniciativas orientadas a los huertos productivos. Muchos asentamientos ya cuentan con una estructura productiva, pero no logran acceder a estos recursos, ya sea por falta de información, de incentivos o de acompañamiento técnico.

Las reuniones y los espacios colectivos han demostrado el interés de las familias por acceder a estos créditos y fortalecer la producción.

Otro punto importante es la participación en redes, movimientos y espacios de articulación más amplios. Los asentamientos tienen una trayectoria significativa de incidencia política, con representantes que actúan en los ámbitos municipal, estatal y

nacional. Esta presencia contribuye a dar visibilidad a las agendas del territorio y a fortalecer las luchas colectivas.

Iniciativas como el [programa Ecoforte](#), El apoyo a proyectos orientados a la estructuración y el fortalecimiento de las redes de agroecología, extractivismo y producción orgánica, llevado a cabo por el Gobierno Federal, es una oportunidad para fortalecer la producción y la organización colectiva. El reto que se plantea es avanzar en la articulación entre el acceso a las políticas públicas, el fortalecimiento de la producción y la construcción de la autonomía, especialmente para las mujeres.

1. Colectivo de mujeres de CONAQ y MMTRSE: organización y reconfiguraciones

Ante innumerables desafíos, el principal de ellos el de mantenerse con vida, el Colectivo de Mujeres de CONAQ continúa articulando y ampliando estrategias de incidencia política.

Uno de los principales frentes de acción es la defensa, protección y cuidado de las mujeres quilombolas, en especial aquellas que están más expuestas a los innumerables conflictos por la tierra y el territorio. Por ello, el colectivo coordina el proyecto Cafuné, que, a través de talleres regionales realizados con líderes quilombolas de diferentes regiones del país, propone construir un Plan de Emergencia para la Protección y el Autocuidado de las Mujeres Quilombolas, elaborado a partir de la escucha y la escritura colectiva.

La iniciativa Cafuné destaca la necesidad de mecanismos de protección más humanizados, que consideren no solo la seguridad física, sino también la salud emocional y espiritual de las defensoras de derechos. Como resultado de este trabajo, se elaboró un folleto con iniciativas de protección y autocuidado y un documental que retrata todo el proceso de los talleres y las escuchas. El lanzamiento de ambos materiales está previsto para mayo.

Del 26 al 30 de enero, el Colectivo/Secretaría Nacional de Mujeres de la Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas (CONAQ) llevó a cabo su Planificación Estratégica Nacional. La actividad evaluó las acciones realizadas durante el último año y elaboró las estrategias para 2026.

Entre sus prioridades se encuentran: la organización del III Encuentro Nacional de Mujeres Quilombolas de la CONAQ en mayo de 2026; la realización de ciclos formativos sobre justicia climática y derechos de las mujeres a lo largo del año; la incidencia en espacios nacionales e internacionales (Marcha de las Mujeres Negras, Consejos, conferencias, CSW, Foro Permanente sobre Afrodescendientes); y la creación de espacios de cuidado y protección colectiva (continuación del proyecto Cafuné, que debate y propone al Estado brasileño medidas de protección para las defensoras de los derechos humanos y ambientales).



El [III Encuentro Nacional de Mujeres Quilombolas de la CONAQ](#) Será un programa de movilización, formación y fortalecimiento de la lucha de las mujeres quilombolas a nivel nacional, que preparará al colectivo para un segundo semestre de intensos enfrentamientos políticos, marcado por el contexto de las elecciones.

El encuentro está previsto para mayo de 2026, en Brasilia (DF). Se espera reunir a más de 500 mujeres quilombolas de todas las regiones del país, además de invitadas nacionales e internacionales, para debatir sobre justicia climática, democracia y reparación histórica.

En esta edición, el evento tendrá como ejes centrales de debate los temas de territorio, democracia y clima. El encuentro adoptará como lema: «Mujeres quilombolas en defensa de la justicia climática, la reparación y la democracia: somos principio, medio y principio». La frase rinde homenaje al maestro quilombola Nego Bispo, antepasado y referente del pensamiento político y filosófico quilombola.

Para las mujeres de la CONAQ, las elecciones también son una prioridad. Tienen el objetivo de ampliar la participación política de las mujeres quilombolas, incluyendo estrategias para el fortalecimiento de candidaturas estatales y federales vinculadas al movimiento.

Por su parte, el enfoque en la incidencia internacional pretende poner en la agenda los temas de justicia climática, violencia y género. En este sentido, el colectivo desarrollará, a lo largo de todo el año 2026, talleres para combatir el racismo ambiental en colaboración con WWF-Brasil.

Cabe destacar que el lema de las mujeres del colectivo CONAQ para este año es «nada sobre nosotras sin nosotras». Este llamamiento nos lleva a observar el intenso trabajo de las mujeres quilombolas para [ampliar los espacios de participación del colectivo](#), orjando la autonomía entre los socios y el protagonismo en las acciones lideradas por mujeres.

Por su parte, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras Rurales de Sergipe ha ampliado su presencia territorial desde 2025, y su dirección está presente en las regiones del sur de Sergipe, el centro-sur, el alto sertão, el sertão occidental y el bajo São

Francisco. La expansión de la dirección a estas regiones refuerza la representatividad y amplía la capacidad de incidencia política, garantizando una mayor coordinación entre las regiones.

Actualmente, el movimiento también está ejecutando cuatro proyectos: [Baraúnas](#), Outras Formas, Raízes da Conectividade e Mover-se na WEB. Además, se han iniciado nuevas colaboraciones con el IPTI (Instituto de Investigación, Tecnología e Innovación).

El proyecto Baraúnas tiene como objetivo fortalecer la asistencia técnica agroecológica y feminista en el semiárido brasileño. Por su parte, los proyectos Raízes da Conectividade y Mover-se fomentan la autonomía tecnológica mediante la creación de servicios digitales y redes comunitarias de Internet. Y el proyecto Outras Formas tiene como objetivo fortalecer la organización política del movimiento en colaboración con otras organizaciones de América Latina. Estos proyectos han contribuido a fortalecer las acciones en los territorios, especialmente en lo que respecta a la organización productiva, la formación y la incidencia política.

El movimiento, articulado en red, cuenta con un proyecto ecoforte en la fase inicial de una cocina comunitaria en la comunidad de São Bento/Salgado, para que las mujeres dispongan de un espacio colectivo para la producción. Otras iniciativas y proyectos en desarrollo apuntan a la ampliación de las oportunidades en el territorio, lo que exige, sin embargo, una mayor articulación interna para potenciar sus resultados.

Es fundamental identificar y fortalecer estrategias prioritarias dentro del movimiento en el estado. Los principales desafíos son el fortalecimiento de la base, la ampliación de la participación, la mejora de la articulación entre territorios y la capacidad de transformar la incidencia política en resultados concretos.

El 6 de abril, el movimiento celebró la primera reunión de la nueva coordinación, elegida en diciembre de 2025. En esta reunión, la coordinación identificó que el Movimiento de Mujeres Trabajadoras Rurales de Sergipe está atravesando un proceso de reconfiguración, marcado por cambios en la coordinación estatal, compuesta por ocho mujeres, presentes en tres territorios. Otro elemento importante de este proceso es el cambio en las formas de articulación política. La relación con las redes más amplias,

especialmente a nivel estatal, regional y nacional, se ha fortalecido, abriendo espacio para la construcción de nuevas articulaciones interregionales y alianzas entre los socios.



La labor del movimiento también se ha vinculado cada vez más a la ejecución de proyectos y al acceso a las políticas públicas, lo que refuerza las acciones en los territorios, pero también exige una mayor capacidad de participación, planificación y sostenibilidad financiera. En este sentido, la institucionalización y la formalización cobran relevancia como estrategias para garantizar la continuidad y la expansión con los socios.

Un desafío que identifica el movimiento es la renovación de los líderes jóvenes en los grupos de base. Los líderes de base vienen sufriendo por cuestiones de edad avanzada y problemas de salud, y percibimos la fragilidad de la renovación.

La movilización del movimiento en el estado va de la mano con los territorios y las acciones regionales. Percibimos un abandono del movimiento en el Nordeste, una

especie de confederación de los movimientos en cada estado del Nordeste, lo que debilita las actividades recurrentes y la movilización de las bases.

Así, la reconfiguración del movimiento representa un proceso de adaptación a nuevas realidades. Se trata de un momento de transición, en el que existen fragilidades y potencialidades, que exigen capacidad de reinvención, fortalecimiento de la base y construcción de nuevas estrategias de actuación.

Los principales desafíos del movimiento son fortalecer las estrategias ya existentes. Además, es necesario avanzar en la incidencia política y en la disputa de narrativas. Construir posicionamientos que enfrenten los retrocesos y afirmen los derechos de las mujeres. En este sentido, la reunión de la coordinación señaló una serie de medidas a tomar en el próximo período:

- Formación de la coordinación y sus fundamentos. Invertir en procesos continuos de formación política y sobre comunicación accesible;
- Fortalecer la base del movimiento y ampliar la movilización y la participación de las comunidades, especialmente de las mujeres y las jóvenes, es esencial para garantizar la sostenibilidad;
- Sostenibilidad financiera del movimiento mediante el acceso a convocatorias de proyectos. Para una mayor participación de las mujeres en los espacios de incidencia;
- Autonomía económica de las mujeres. La creación de grupos de mujeres productoras representa un avance importante y debe ampliarse al resto de territorios;
- Se debe profundizar la articulación en redes y alianzas. Participación en espacios municipales, territoriales, estatales y nacionales. Fortalecer alianzas, ampliar colaboraciones y mejorar la participación política;
- Definir prioridades, mejorar la distribución de responsabilidades y dar seguimiento de manera más sistemática a las acciones y proyectos;
- Consolidación y ejecución de la planificación anual;

- Mantenimiento de la aplicación [“Do Quintal à Cozinha”](#) El funcionamiento de la aplicación es fundamental para fortalecer la comunicación del movimiento. La aplicación representa un espacio de conexión entre las personas, de intercambio de información y de visibilidad de las acciones desarrolladas por las mujeres en los territorios;
- Establecer alianzas con organizaciones (proyectos, asesoría, capacitación);
- Participar de manera efectiva en las agendas nacionales;
- Participar en el Encuentro Nacional de Agroecología, en Foz do Iguaçu-PR, organizado por la ANA (Articulación Nacional de Agroecología);
- Participar en el Encuentro de la Articulación del Semiárido Brasileño, en Paraíba;
- Participar en la Marcha de las Margaritas 2027. La articulación y la organización comienzan en 2026, lo que nos desafía, incluso, a empezar a pensar desde ahora, para llegar hasta Brasilia.